

JUSTICIA EMBARGADA EN ESTADOS UNIDOS

# Los exterminadores

PAUL CRAIG ROBERTS \*

EN EL SIGLO XXI los estadounidenses han presenciado un extraordinario colapso en el imperio de la ley y en sus protecciones constitucionales. Actualmente los ciudadanos estadounidenses, que otrora eran gente libre protegida por la ley, pueden ser asesinados o detenidos indefinidamente en prisión sin que se presente evidencia alguna de su culpa a un tribunal, y pueden ser sentenciados sobre la base de testimonios secretos de testigos anónimos que no son sometidos a contrainterrogatorio. El “sistema de justicia” de Estados Unidos ha sido transformado por el régimen de Bush/Obama en el “sistema de justicia” de la Alemania de la Gestapo. No hay ninguna diferencia.

En un artículo, Stephen Downs, exabogado jefe en la Comisión de Conducta Judicial del estado de Nueva York, y Kathy Manley, abogada defensora penal y miembro de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, informan sobre cómo el gobierno de Estados Unidos destruyó una obra benéfica, la Holy Land Foundation (Fundación Tierra Santa), que suministraba dinero para alimentar a los pobres y para construir escuelas y hospitales en Palestina.

La obra benéfica, consciente de los peligros de estar basada en EE.UU. y de hacer algo por los palestinos, se basó en el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia (sic) para recibir orientación sobre cómo enviar ayuda humanitaria. Dicha obra hizo su envío a los mismos comités de ayuda en Palestina a los que la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la ONU utilizaban para distribuir a los palestinos.

En el primer juicio contra la Fundación Tierra Santa, el gobierno americano admitió que ninguna de las donaciones de la fundación había beneficiado a organizaciones terroristas, y los fiscales federales no lograron una condena. Por lo tanto los fiscales volvieron a enjuiciar a la obra benéfica.

En el segundo juicio, el juez permitió que los fiscales llamaran a un “experto anónimo” para que dijera al jurado que algunos de los comités utilizados por USAID y la ONU, aprobados por el Departamento de Estado eran controlados por Hamás, el gobierno elegido de Gaza que Israel exige que Estados Unidos califique de “terrorista”.

Como señalan Downs y Manley, un “experto anónimo” no puede ser “cuestionado porque es desconocido”. No puede haber un contrainterrogatorio. El “experto” podría ser cualquier persona, alguien pagado para que mienta al jurado, un judío que cree que toda ayuda a palestinos incluye “ayuda a terroristas”, o un miembro del Mossad, el servicio de inteligencia israelí que ha infiltrado exhaustivamente EE.UU. según expertos de inteligencia estadounidenses.

Hay injusticias por doquier, admiten los

autores, ¿por qué entonces el problema es interesante para todos? La respuesta es que la cláusula de debido proceso de la Constitución de Estados Unidos requiere que las leyes penales den aviso justo en cuanto a qué conducta está prohibida. Según Downs y Manley, la Fundación Tierra Santa, siguió la lista de organizaciones terroristas designadas del Departamento de Estado y evitó todo contacto con organizaciones en la lista, pero fue acusada y condenada a pesar de ello. Eso nos dice que los fiscales federales son enconadamente corruptos y que los miembros de los jurados son tan ineptos e influenciados por la propaganda que son inútiles para los acusados.

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a considerar este caso más flagrante de condena injusta. Al hacerlo estableció que la corte, como la Cámara de Representantes, el Senado, y el poder ejecutivo, no solo son sirvientes del Estado policial, sino también sirvientes de Israel y apoyan la destrucción de los palestinos al designar la ayuda a Palestina como un acto de terrorismo.

Lo que significa para vosotros es que vuestra participación en transacciones o asociaciones legales puede ser declarada ex post facto como participaciones criminales por testigos secretos. Así se puede ahora establecer el carácter criminal de vuestra conducta pasada, según Downs y Manley, por “expertos anónimos”, voceros de los fiscales del gobierno que no pueden “ser enfrentados o contrainterrogados dentro del significado de la 6ª Enmienda”.

Downs y Manley escriben: “Las implicaciones son enormes. El gobierno ahora puede criminalizar la ideología y la expresión política, religiosa y social. Se puede establecer posteriormente que donaciones a grupos por la paz, la participación en manifestaciones, la asistencia a la iglesia, la mezquita o la sinagoga, el agasajo de amigos, y el envío de material por Internet, por ejemplo, son considerados ilegales gracias a ‘asociaciones’, fabricadas por expertos anónimos, que supuestamente apoyan a organizaciones designadas como terroristas de las que nadie ha oído hablar”.

Los autores podrían haber agregado que si el gobierno te quiere coger, todo lo que tiene que hacer es declarar que alguien o alguna organización en algún momento en tu pasado estuvieron conectados de alguna manera indefinida con el terrorismo. Basta con la afirmación del gobierno. No se requiere prueba alguna. El jurado, de cerebros lavados, no te protegerá.

Preparaos para que dentro de uno o dos años se prohíba toda crítica de nuestro gobierno “de libertad y democracia”. En Estados Unidos, están a punto de exterminar la verdad.

**\* Paul Craig Roberts fue editor de The Wall Street Journal y secretario asistente del Secretario del Tesoro estadounidense.**



## Tortura: revelan lista de 54 países que colaboran con la CIA

MEDIO CENTENAR DE países colaboraron con un polémico programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos relacionado con secuestros, encierro y torturas de prisioneros en territorios extranjeros. Un reporte de 213 páginas de la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative (OSJI), con sede en Nueva York, da cuenta de que al menos 54 países —muchos de ellos en Europa— cooperaron con el controvertido procedimiento.

Fue amplia y prolongada la participación de gobiernos nacionales en el plan de la CIA, la Agencia no habría podido jamás operar su programa sin el apoyo de estos estados, subraya OSJI.

El informe de la ONG identifica como estados colaboradores a Suecia, Finlandia, Alemania, España, Portugal, Austria, Pakistán, Afganistán, Egipto, Jordania, Irlanda, Islandia, Canadá y Chipre, entre otros, destacan agencias y organizaciones no gubernamentales en sus páginas web.

“No cabe la menor duda de que altos funcionarios de la administración de George W. Bush son responsables por haber autorizado las violaciones de derechos humanos relacionadas con las detenciones secretas y entregas extraordinarias de personas, y la impunidad de que han disfrutado hasta la fecha sigue siendo motivo de gran preocupación”, dice el informe.

“Pero la responsabilidad de estas violaciones no se agota en Estados Unidos. Las operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias, elaboradas para llevarse a cabo secretamente fuera de Estados Unidos, no podrían hacerse realidad sin una participación activa de gobiernos

extranjeros. Estos gobiernos también deben responder por ello”.

Según la OSJI, el listado de esos estados incluye países donde existieron cárceles secretas en las que se practicaron torturas durante varios años. Otros países son acusados de haber concedido una ayuda solapada al programa al permitir el uso de su espacio aéreo y sus aeropuertos en operaciones de entrega.

Este plan de Washington se implementó después de los ataques terroristas del 9/11 en el 2001 y las nuevas revelaciones coinciden ahora con la nominación de John Brennan como director de la CIA en sustitución del general David Petraeus, quien renunció en medio de un escándalo de faldas.

Altos oficiales en la administración de George W. Bush mantienen la mayor responsabilidad por la autorización de violaciones de los derechos humanos en las instalaciones secretas patrocinadas en diferentes países, comenta el análisis de la OSJI.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, pidió a la Casa Blanca detener cualquier decisión sobre la jefatura de la CIA hasta aclarar las circunstancias del ataque al consulado estadounidense en Libia.

Sugiero que no olvidemos la debacle de Bengasi, subrayó el congresista sureño al oponerse al proceso de confirmación de Brennan, como próximo director de la Agencia Central de Inteligencia.

La opción del experto en contraterrorismo para director de la CIA también enfrenta resistencia dentro de la bancada demócrata porque se trata de un exfuncionario de la administración Bush presuntamente patrocinador de interrogatorios con torturas.